

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM**

**LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE
TRANSIÇÃO I**

L514

Legislação, Direitos Humanos e Justiça de Transição I [Recurso eletrônico on-line]
organização I Congresso Internacional de Justiça e Memória (I CIJUM): Universidade de
Itaúna - Itaúna;

Coordenadores: Giovanni Vinicius Caetano e Silva, Farissa Maria Drumond Chequer
Queiróz e Filipe Augusto Silva - Itaúna: Universidade de Itaúna, 2023.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-5648-922-3

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: Enfrentando o legado das ditaduras e governos de matriz autoritária.

1. Direito. 2. Justiça. 3. Memória. I. I Congresso Internacional de Justiça e Memória
(1:2024 : Itaúna, MG).

CDU: 34

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I CIJUM

LEGISLAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO I

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia

no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la misma, es preciso atender una mirada trífrente. Esto es, que es necesario abordarla desde el enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar

Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y peligrosa, en un lugar común.

Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia (Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y Panamá.

**A INCOMUNICABILIDADE DO INVESTIGADO COMO VESTÍGIO
AUTORITÁRIO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO**

**LA INCOMUNICABILIDAD DEL INVESTIGADO COMO VESTIGIO
AUTORITARIO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BRASILEÑO**

Diego Ramos Pinzolas ¹

Vinicius Augusto Menezes Martins ²

Resumo

O presente trabalho científico apresenta como temática o instituto da incomunicabilidade do investigado no sistema processual penal brasileiro, seu contexto de surgimento e sua (in) adequação à ordem constitucional de 1988. Após análise, percebe-se sua natureza predominantemente autoritária e inquisitorial, além de sua incompatibilidade com a identidade constitucional garantista fixada pela Constituição Federal.

Palavras-chave: Incomunicabilidade, Ditaduras, Garantias, Direito processual penal

Abstract/Resumen/Résumé

El presente trabajo científico presenta como temática el instituto de la incomunicabilidad del investigado en el sistema procesal penal brasileño, su contexto de surgimento y su (in) adecuación con el orden constitucional de 1988. Luego del análisis, se percibe su naturaleza predominantemente autoritaria y inquisitorial, además de su incompatibilidad con la identidad constitucional garantista fijada por la Constitución Federal.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Incomunicabilida, Dictaduras, Garantias, Derecho procesal penal

¹ Graduando em Direito.

² Graduando em Direito.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho objetiva analisar a natureza jurídica e a origem histórica do instituto da incomunicabilidade do indiciado face ao perfil garantista estabelecido pela ordem constitucional de 1988, tendo sido mecanismo essencial para o aparato policial sobre o qual se organizaram as experiências ditatoriais do Estado Novo e da Ditadura Civil-Militar. Entretanto, com a elevação, pelo Constituinte Originário em 1988, da dignidade humana a fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1, III, CR/88) e a inclusão de diversas garantias processual-penais no art. 5, é imperiosa a reflexão acerca da recepção dessa previsão pela nova ordem constitucional.

A (in)constitucionalidade desta previsão legal se relaciona de forma essencial ao presente político nacional, em que discursos garantistas e inquisitoriais se conflitam no âmbito do debate em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. Nessa perspectiva, é válido o questionamento acerca da validade do instituto supramencionado, sob a perspectiva de uma possível incompatibilidade com normas constitucionais e infraconstitucionais consagradas no direito brasileiro. Em adição, há decisões e precedentes judiciais, com base na alusão e até no uso *stricto* do instituto da incomunicabilidade que elucidam desacordo com as garantias do devido processo legal criminal e apresentam um conflito normativo de teor constitucional.

Outrossim, as origens do código de processo penal possibilitam uma confirmação da hipótese interpretativa do legislador, assim como suas intenções, que, ao decorrer dessa exposição, serão provadas incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. É de valor, para fins específicos, analisar os modos de utilização do instituto da incomunicabilidade durante os períodos históricos do país, com ênfase naqueles em que se mostrou diminuta as liberdades individuais e direitos fundamentais — o Estado Novo Vargas e a Ditadura Civil-Militar. Ponderar-se-á a real influência dessa norma na realidade brasileira com a validade e congruência constitucional, com os princípios do direito brasileiro e com a opção política da sociedade brasileira.

No que se diz respeito à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, baseando-se na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico-social. Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo histórico-jurídico. Por sua vez, o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao gênero de pesquisa, adotou-se a pesquisa teórico-bibliográfica.

2. CONTEXTO HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA INCOMUNICABILIDADE

A incomunicabilidade do indiciado, de previsão legal no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.689/41 (Código de Processo Penal) em sua redação original, é faculdade concedida à autoridade policial no curso do inquérito de, em caráter excepcional, suspender o direito de comunicar-se o preso com qualquer pessoa que não a própria autoridade (Jesus, 1982). O parágrafo único do dado dispositivo o limitava ao período máximo de três dias, e condicionava sua decretação ao atendimento do interesse da sociedade e da conveniência para a investigação. (Mirabete, 2007). Posteriormente, passou a se respeitar, após a Lei nº 4.214/63 (Estatuto da Ordem Dos Advogados do Brasil), o direito de comunicação com o advogado, baseando-se para tanto no art. 89, III da novel norma (Brasil, 1941).

O contexto que cerca o estabelecimento da norma processual penal brasileira e do diploma legal que a contém é o de estabilização da ditadura estado-novista de Getúlio Vargas, mas é necessário pontuar outros antecedentes jurídicos e políticos para sua plena compreensão. O Estado Novo — iniciado no dia 10 de novembro de 1937 —, em sua dimensão normativa, foi precedido por um processo de intensa institucionalização de previsões autocráticas como a Lei de Segurança Nacional (1935), além da criação do Tribunal de Segurança Nacional (1936) e, principalmente, da Delegacia Especial de Segurança Política e Social, a Desp, em 1933, sendo colocado como comandante dessa o capitão do Exército pró-nazista Filinto Müller. Não surpreendentemente, Müller manteve, por meio de seu cargo, um intercâmbio de técnicas e métodos de interrogatório com a Gestapo, polícia secreta de Hitler e “não vacilou em mandar matar, torturar ou deixar apodrecer nos calabouços da Desp suspeitos e adversários declarados do regime” (Schwarcz; Starling, 2015).

Nesse momento, em que o aparato repressivo varguista ganhava maturidade, é que se insere o Código de Processo Penal, decretado no dia 8 de setembro de 1941, guardando semelhanças também com as ideias de Alberto Torres, cientista político e jurista fluminense, defensor da ideia de que ao Estado caberia organizar a Sociedade, conduzir um projeto de nação e implantar as mudanças de que esta precisasse. Dessa forma, pode-se vislumbrar, na Exposição de Motivos Do Código de Processo Penal, escrita pelo mineiro Francisco Campos, em seu Motivo II, a narrativa que conduzia a mudança, expressa na seguinte passagem (Campos, 1941):

As nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso **catálogo de garantias** e favores, que a repressão se torna, necessariamente defeituosa e retardatária decorrendo **daí um indireto estímulo da criminalidade**. (grifos nossos)

Portanto, fica evidente o caráter inquisitorial e de aversão às garantias individual do diploma legal que nascia, já plenamente adequado a um regime de orientação autocrática, e que mesclava elementos policialescos típicos do Estado Liberal a uma política econômica já mais próxima à do Estado Social. Não é adequado, entretanto, classificá-lo como fascista, faltando-lhe um sistema repressivo verdadeiramente ubíquo e uma linha ideológica única e incontestada, prevalecendo um caráter pragmático politicamente e modernizante, o que levou o escritor e poeta alagoano Graciliano Ramos a chamá-lo em tom crítico de “Nosso pequenino fascismo tupinambá” (Schwarcz; Starling, 2015).

3. INCOMUNICABILIDADE NO PERÍODO DA DITADURA E NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Marcado profundamente na história democrática brasileira, por 21 anos, de 1964 a 1985, o Brasil esteve sob um regime ditatorial, advindo de um golpe civil-militar perpetrado em 31 de março de 1964. Elio Gaspari, em sua obra “A Ditadura Envergonhada: As Ilusões Armadas” caracteriza interessantemente o período:

Durante os 21 anos de duração do ciclo militar, sucederam-se períodos de maior ou menor racionalidade no trato das questões políticas. Foram duas décadas de avanços e recuos, ou, como se dizia na época, “aberturas” e “endurecimentos”. De 1964 a 1967 o presidente Castello Branco procurou exercer uma ditadura temporária. De 1967 a 1968 o marechal Costa e Silva tentou governar dentro de um sistema constitucional, e de 1968 a 1974 o país esteve sob um regime escancaradamente ditatorial. De 1974 a 1979, debaixo da mesma ditadura, dela começou-se a sair. Em todas essas fases o melhor termômetro da situação do país foi a medida da prática da tortura pelo Estado. Como no primeiro dia da Criação, quando se tratava de separar a luz das trevas, podia-se aferir a profundidade da ditadura pela sistemática com que se torturavam seus dissidentes.

É inegável as inúmeras violações aos direitos humanos no período ditatorial, discutidas relevantes no contexto atual por diversos meios, em que se destaca o projeto da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que visa, após incessante pressão, reconhecer oficialmente os abusos cometidos no período ditatorial.

O instituto da incomunicabilidade tratava-se de uma arma de coibição no abrangente arsenal militar para a repressão dos dissidentes. Pontua-se que houve uma escalada nas diminuições de liberdades individuais em prol do Estado, atingindo seu ápice com o Ato Institucional Nº 5, documento outorgado pelo governo, com estrutura semelhante aos antigos “decretos-lei”, em que se diminui ao máximo direitos e garantias fundamentais sociais e jurídicas, atribuindo enorme poder aos detentores do aparato estatal.

O *Habeas Corpus*, instituto jurídico que protege os cidadãos da restrição da liberdade de modo arbitrário, também foi constrangido. Com isso, centenas de pessoas desapareciam após prestarem esclarecimento sobre suas atitudes políticas, sem deixar, pois, qualquer notícia ou responsabilizarem-se os envolvidos. Os advogados e famílias, uma vez sem a proteção de institutos garantidores, ficavam desmunidos quanto às formas de encontrarem os perdidos.

Em contraponto, após o fim desse soturno período, a Constituição de 1988 impõe-se pelas vias democráticas como bastião do Estado Democrático de Direito (art. 1, *caput*, CR/88). “A constituinte de 1988 redigiu e aprovou a constituição mais liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de Constituição Cidadã” (Carvalho, 2002). A previsão da incomunicabilidade no código de alhures era parte de um respaldo formal, dentre as dezenas de institutos que legitimaram a ditadura, e, como a maioria deles, foram rechaçados e não recepcionados pela nova constituição.

A recepção, *lato sensu*, é a compatibilidade de institutos, normas e regras com as premissas dos princípios e das disposições constitucionais, podendo ser adotadas pelo ordenamento jurídico. É difundido majoritariamente na doutrina¹ e na jurisprudência a não recepção do Art. 21 do Código de Processo Penal, incompatível com princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana e o devido processo legal. Ademais, confirma-se sua impraticabilidade por leis posteriores de semelhante notoriedade – Art. 7º, III, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e a previsão sumária do Art. 136, § 3.º, IV, da Constituição Federal que impede a incomunicabilidade do preso em contexto de **Estado de Defesa**.

Em tom crítico, expor-se-á trecho de decisão monocrática do Excelentíssimo Ministro da Suprema Corte Brasileira Alexandre de Moraes, como exemplo, em recente cenário temporal, entre decisões professadas que remetem aos institutos de incomunicabilidade do réu, vexados amplamente. Sobre o caso Roberto Jefferson, decide o magistrado:

(2) PROIBIÇÃO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO EXTERIOR, UMA VEZ QUE PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRESO, INCLUSIVE SENDO VEDADA A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS DE SUA TITULARIDADE, DE INTERPOSTAS PESSOAS OU PARTIDOS POLÍTICOS OU DE QUAISQUER OUTRAS PESSOAS;
(3) PROIBIÇÃO DE RECEBER VISITAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SALVO DE SEUS FAMILIARES;

¹ Ver em: Doutrinadores que reconhecem a não recepção do artigo 21 do CPP: Guilherme de Souza Nucci, Júlio Fabbrini Mirabete, Aury Lopes Jr., Pedro Henrique Demercian, Jorge Assaf Maluly, Fernando da Costa Tourinho Filho, Norberto Avena, Renato Marcão; Doutrinadores que reconhecem a recepção do artigo 21 do CPP: Afrânio Silva Jardim, Vicente Greco Filho, Carlos Frederico Coelho Nogueira, Damásio de Jesus.

- (4) PROIBIÇÃO DE CONCEDER QUALQUER ESPÉCIE DE ENTREVISTA, INDEPENDENTE DE SEU MEIO DE VEICULAÇÃO, SALVO MEDIANTE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;
- (5) PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM QUAISQUER DOS INVESTIGADOS NO INQUÉRITO 4.874/DF.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, não seria adequado – tendo em vista o contexto de outorga do Código de Processo Penal, sua utilização, inspiração histórica e viés repressivo no Estado Novo varguista e na Ditadura Militar, de 1964 a 1985 – consentir com perpetuação da existência de danos dispositivo ao Estado Democrático de Direito e às garantias liberais individuais de cada cidadão, a incomunicabilidade do réu.

Não é tolerável qualquer movimentação que intua a abolição do Estado Democrático de Direito, conquistado após duros prélios de massas populares corajosas e liberais, devendo seus autores serem punidos de acordo com legislação adequada. Data vênua, é pungente que se analise amplamente as competências e garantias fundamentais, estabelecidas pelo próprio Estado de Direito para assegurar os direitos dos réus e de um julgamento justo e imparcial, sendo avultosa a preliminar separação entre ofendido, acusador, réu, julgador e executor no processo penal democrático.

Por fim, a democracia, a constituição e diversos outros institutos são, para Robert Alexy, uma ordem concreta de valores e exprimem a identidade constitucional do povo brasileiro (Alexy, 2018), incumbindo a cada cidadão sua proteção. Tampouco presente no ordenamento, a previsão da incomunicabilidade do réu deve ser superada no contexto jurídico, para que os princípios constitucionais democráticos e liberais imperem, sem prejuízo de abusos autoritários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2a. ed., São Paulo: Malheiros, 2018.

ALVES, Leonardo Barreto Moreira. **Manual de Processo Penal**. 3ª Ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Diário Oficial da União, Brasília, DF. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 20 out. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em 18 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. **Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm. Acesso em 20 out.. 2023.

CAMPOS, Francisco. **Exposição de Motivos do Código de Processo Penal**. Decreto Lei nº. 3.689 de 03 de outubro de 1941. In: Vade Mecum. 36ª ed. São Paulo, SP: Rideel, 2023. p.418 a 421.

CARVALHO, José Murilo de. **Cidadania no Brasil: O longo Caminho**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

DE JESUS, Damásio. **Código de Processo Penal Anotado**. 25a. ed. São Paulo: Saraiva, 2012

GASPARI, Elio. **A ditadura envergonhada: As Ilusões Armadas**. 1a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GRECO, Vicente Filho. **Manual de processo penal**. 9a. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NÍCACIO, Camila Silva. **(Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e prática**. 5a. ed. São Paulo: Almedina, 2020.

JESUS, Damásio Evangelista de. **Código de Processo Penal Anotado**. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1982.

MIRABETE, Júlio Fabbrini. **Processo Penal**. 18ª Ed. São Paulo: Atlas: 2007

MORITZ SCHWARCZ, Lilia; MURGEL STARLING. **Brasil: Uma biografia**. 1ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de processo penal e execução penal**. 13a. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Supremo Tribunal Federal. **PETIÇÃO 9.844 DISTRITO FEDERAL**. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2022/10/Moraes-decisao_monocratica-Roberto-Jefferson-23-out-2022.pdf. Acesso em: 18 out. 2023.